

El licenciado **Manuel José Calvo**, actuando en su propio nombre ha presentado ante esta Corporación, instaura acción de amparo constitucional contra "... el señor Ministro de Gobierno y Justicia, Licenciado **JUAN BAUTISTA CHEVALIER** y contra la orden de Deportación del señor **DAVID BAKER** proferida el 27 de enero de 1993 de la cual no se ha notificado ni se le ha entregado copia a nuestro mandante".

La acción se fundamenta en los siguientes hechos:

"PRIMERO: El señor **DAVID BAKER** es residente de la República de Panamá en virtud de visa de casado con panameña que le fue otorgada por la Dirección de Migración y Naturalización del Ministerio de Gobierno y Justicia hace año y medio aproximadamente.

SEGUNDO: El señor **DAVID BAKER** es portador de la cédula de identidad personal No.E-8-58409 y está casado con la señora **MARISOL SAURI de BAKER**, ciudadana panameña, mujer, mayor de edad, casada, con cédula de identidad personal No.8-159-1241.

TERCERO: El señor **DAVID BAKER** tiene tres hijos panameños: Uno de ellos nacido en territorio nacional y los dos restantes en los Estados Unidos de América, pero son panameños por nacimiento.

CUARTO: En esta misma fecha siendo las 6:05 se presentaron a la residencia del señor **DAVID BAKER** agentes de la Dirección de Inteligencia Institucional de la Policía (DIIP) y un representante de la Fiscalía Auxiliar y lo detuvieron para su deportación, diciéndole simplemente que su visa había sido cancelada por el Ministro de Gobierno y Justicia, mediante resolución de 27 de enero de 1993.

QUINTO: Inmediatamente fue introducido a un auto oficial y conducido al Aeropuerto Internacional de Tocumen donde se encuentra en estos momentos para ser deportado sin motivo alguno y sin que se le haya dado oportunidad de defenderse, ni se le haya notificado resolución alguna o entregado copia de la misma.

SEXTO: Este proceder arbitrario es violatorio de los más elementales derechos constitucionales y legales de mi mandante **DAVID BAKER**, quien tiene derecho a un proceso justo, a ser oído antes que se tome una medida tan grave como ésta que lo separa de su esposa y de sus hijos".

Como se observa con claridad en el hecho 5o. en que se fundamenta el amparo, el señor **DAVID BAKER** ha sido supuestamente detenido. Según el amparista esta presunta detención involucra un "proceder arbitrario...violatorio de los más elementales derechos constitucionales y legales". La sola circunstancia de que el objeto de la presente acción constitucional sea una detención supuestamente arbitraria, es decir, que se impugna un acto de autoridad que limita la libertad ambulatoria, provoca que el amparo estudiado no pueda ser admitido, en vista de que ya ésta Corporación en otras oportunidades ha expuesto su criterio, en el sentido de que el remedio sumario en contra de

cualquier acto de autoridad que limite la libertad ambulatoria, está previsto en la Constitución y en la ley mediante el denominado recurso de Habeas Corpus. (Ver sentencia del 18 de noviembre de 1991, Amparo Constitucional propuesto por **CONSTANTINO LEKAS** y otros contra el Fiscal 3o. del Primer Circuito de Panamá). Es más, el propio licenciado **Manuel José Calvo**, aparentemente ha entendido lo anterior, toda vez que interpuso ante esta Corte un recurso de habeas corpus a favor del señor **David Baker**, el cual se encuentra pendiente de decisión por este Tribunal Constitucional. (Cfr. expediente del Pleno No.76-93, bajo la ponencia del Magdo. **José Manuel Faúndes**).

Por último, y ya como cuestión de forma, se puede observar que el amparo de garantías constitucionales no viene dirigido al Pleno de la Corte Suprema de Justicia ni tampoco al Presidente.

En consecuencia, **LA CORTE SUPREMA, PLENO**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **NO ADMITE** la presente acción de amparo.

NOTIFIQUESE,

(FDO.) **CARLOS LUCAS LOPEZ T.**

(FDO.) **ELOY ALFARO**

(FDO.) **EDGARDO MOLINO MOLA**

(FDO.) **FABIAN A. ECHEVERS**

(FDO.) **JOSE MANUEL FAUNDES**

(FDO.) **MIRTZA ANGELICA**

(FDO.) **AURA EMERITA**

FRANCESCHI DE AGUILERA

GUERRA DE VILLALAZ

(FDO.) **ARTURO HOYOS**

(FDO.) **CARLOS HUMBERTO CUESTAS G.**

SECRETARIO GENERAL

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO **RICARDO STEVENS** EN CONTRA DEL ARTICULO 27 DE LA LEY 34 DE 1979 (CASO LABORAL PROMOVIDO POR **ERIC RODRIGUEZ** CONTRA **PACIFIC DODWELL, S. A.**). MAGISTRADO PONENTE: **CARLOS LUCAS LOPEZ T.**

-La Corte Suprema -PLENO- que **NO ES INCONSTITUCIONAL** el art.27 de la Ley 34 de 26 de septiembre de 1979.-

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO. PANAMA, DIECIOCHO (18) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

V I S T O S:

La Juez Primera de Trabajo de la Segunda Sección, mediante oficio No.29 de 6 de febrero de 1991, remitió a esta Superioridad el expediente contentivo de la Advertencia de Inconstitucionalidad formulada por el licenciado **Ricardo Stevens**, apoderado legal de **Eric Rodríguez**, dentro del proceso laboral que éste le sigue a **Pacific Dodwell, S. A.**

El licenciado Manuel José Calvo, actuando en su propio nombre ha presentado ante esta Corporación, instaura acción de amparo constitucional contra "... el señor Ministro de Gobierno y Justicia, Licenciado JUAN BAUTISTA CHEVALIER y contra la orden de Deportación del señor DAVID BAKER proferida el 27 de enero de 1993 de la cual no se ha notificado ni se le ha entregado copia a nuestro mandante".

La acción se fundamenta en los siguientes hechos:

"PRIMERO: El señor DAVID BAKER es residente de la República de Panamá en virtud de visa de casado con panameña que le fue otorgada por la Dirección de Migración y Naturalización del Ministerio de Gobierno y Justicia hace año y medio aproximadamente.

SEGUNDO: El señor DAVID BAKER es portador de la cédula de identidad personal No.E-8-58409 y está casado con la señora MARISOL SAURI de BAKER, ciudadana panameña, mujer, mayor de edad, casada, con cédula de identidad personal No.8-159-1241.

TERCERO: El señor DAVID BAKER tiene tres hijos panameños: Uno de ellos nacido en territorio nacional y los dos restantes en los Estados Unidos de América, pero son panameños por nacimiento.

CUARTO: En esta misma fecha siendo las 6:05 se presentaron a la residencia del señor DAVID BAKER agentes de la Dirección de Inteligencia Institucional de la Policía (DIIP) y un representante de la Fiscalía Auxiliar y lo detuvieron para su deportación, diciéndole simplemente que su visa había sido cancelada por el Ministro de Gobierno y Justicia, mediante resolución de 27 de enero de 1993.

QUINTO: Inmediatamente fue introducido a un auto oficial y conducido al Aeropuerto Internacional de Tocumen donde se encuentra en estos momentos para ser deportado sin motivo alguno y sin que se le haya dado oportunidad de defenderse, ni se le haya notificado resolución alguna o entregado copia de la misma.

SEXTO: Este proceder arbitrario es violatorio de los más elementales derechos constitucionales y legales de mi mandante DAVID BAKER, quien tiene derecho a un proceso justo, a ser oído antes que se tome una medida tan grave como ésta que lo separa de su esposa y de sus hijos".

Como se observa con claridad en el hecho 5o. en que se fundamenta el amparo, el señor DAVID BAKER ha sido supuestamente detenido. Según el amparista esta presunta detención involucra un "proceder arbitrario...violatorio de los más elementales derechos constitucionales y legales". La sola circunstancia de que el objeto de la presente acción constitucional sea una detención supuestamente arbitraria, es decir, que se impugna un acto de autoridad que limita la libertad ambulatoria, provoca que el amparo estudiado no pueda ser admitido, en vista de que ya ésta Corporación en otras oportunidades ha expuesto su criterio, en el sentido de que el remedio sumario en contra de

cualquier acto de autoridad que limite la libertad ambulatoria, está previsto en la Constitución y en la ley mediante el denominado recurso de Habeas Corpus. (Ver sentencia del 18 de noviembre de 1991, Amparo Constitucional propuesto por CONSTANTINO LEKAS y otros contra el Fiscal 3o. del Primer Circuito de Panamá). Es más, el propio licenciado Manuel José Calvo, aparentemente ha entendido lo anterior, toda vez que interpuso ante esta Corte un recurso de habeas corpus a favor del señor David Baker, el cual se encuentra pendiente de decisión por este Tribunal Constitucional. (Cfr. expediente del Pleno No.76-93, bajo la ponencia del Magdo. José Manuel Faúndes).

Por último, y ya como cuestión de forma, se puede observar que el amparo de garantías constitucionales no viene dirigido al Pleno de la Corte Suprema de Justicia ni tampoco al Presidente.

En consecuencia, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la presente acción de amparo.

NOTIFIQUESE,

(FDO.) CARLOS LUCAS LOPEZ T.

(FDO.) ELOY ALFARO

(FDO.) EDGARDO MOLINO MOLA

(FDO.) FABIAN A. ECHEVERS

(FDO.) JOSE MANUEL FAUNDES

(FDO.) MIRTZA ANGELICA

(FDO.) AURA EMERITA

FRANCESCHI DE AGUILERA

GUERRA DE VILLALAZ

(FDO.) ARTURO HOYOS

(FDO.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS G.
SECRETARIO GENERAL

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO RICARDO STEVENS EN CONTRA DEL ARTICULO 27 DE LA LEY 34 DE 1979 (CASO LABORAL PROMOVIDO POR ERIC RODRIGUEZ CONTRA PACIFIC DODWELL, S. A.). MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LOPEZ T.

-La Corte Suprema -PLENO- que NO ES INCONSTITUCIONAL el art.27 de la Ley 34 de 26 de septiembre de 1979.-

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO. PANAMA, DIECIOCHO (18) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

V I S T O S:

La Juez Primera de Trabajo de la Segunda Sección, mediante oficio No.29 de 6 de febrero de 1991, remitió a esta Superioridad el expediente contentivo de la Advertencia de Inconstitucionalidad formulada por el licenciado Ricardo Stevens, apoderado legal de Eric Rodríguez, dentro del proceso laboral que éste le sigue a Pacific Dodwell, S. A.

El demandante advierte la inconstitucionalidad del artículo 27 de la Ley 34 de 1979 que reglamenta el trabajo portuario en los Puertos de Balboa y Cristóbal; norma que pretende aplicarse al caso que su mandante le sigue a la empresa Pacific Dodwell, S. A. La norma impugnada trata sobre la forma de pago de las horas extras de trabajo, que, según el demandante, "establece pagos inferiores a los que señalan a otros trabajadores para el mismo tiempo de labores en jornada extraordinaria, como está indicado en el artículo 33 del Código de Trabajo, que contempla recargos del 25%, 50% y 75%". Considera el demandante que esta norma, al establecer un salario inferior, crea desigualdad y discriminación en perjuicio del trabajador portuario, lo que vulnera el principio laboral de igualdad de salario establecido en el artículo 63 de la Constitución.

Admitida la presente advertencia se corrió traslado al Procurador de la Administración, para que emitiera su opinión en el término que señala el artículo 2554 del Código Judicial.

Mediante vista No.465 de 10 de septiembre de 1992, el Procurador de la Administración rindió su opinión sobre el negocio que nos ocupa. En ella señala que sí existe una contradicción entre el artículo 27 de la Ley 34 de 1979 y el artículo 33 del Código de Trabajo, no obstante, considera que ésta debe deslindarla el propio juzgador, toda vez que se trata de normas de la misma jerarquía, una específica, la Ley 34 de 1979, y la otra de alcance general el Código de Trabajo. Además, señala que no contradice el artículo 63 constitucional, ya que éste se refiere a igualdad de salario por el mismo trabajo en idénticas condiciones y al referirse al pago de las horas extraordinarias sólo establece que éstas serán pagadas con recargo, sin detallar porcentajes. Finaliza la vista señalando que su despacho considera que el artículo 27 de la Ley 34 de 26 de septiembre de 1979 no es inconstitucional.

Devuelto el expediente se fijó en lista para que todas las personas interesadas presentaran sus argumentos por escrito sobre el caso, publicados los respectivos edictos y pasado el término correspondiente, se remitió a este despacho para resolver.

Llegado el momento de resolver, a ello se procede previas las consideraciones siguientes:

La Corte coincide con el planteamiento del Procurador de la Administración, cuando señala que lo que tenemos en discusión es una incompatibilidad entre dos normas de la misma jerarquía, una específica, que regula la forma de pago de las horas extraordinarias de trabajo para los obreros de los puertos de Balboa y Cristóbal, y la otra, de carácter general, que regula el pago de las horas extraordinarias para todos los trabajadores que se rijan por el Código de Trabajo.

La norma impugnada se encuentra en la Ley 34 de 26 de septiembre de 1979, que regula las relaciones de trabajo de los obreros portuarios con respecto a todas las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, que presten servicios en los puertos antes mencionados. El artículo 27 regula la jornada máxima de trabajo y el recargo a pagar por las horas extraordinarias laboradas:

"Artículo 27. El tiempo de trabajo que exceda la jornada máxima diaria, será remunerada con un recargo del diez por ciento.

El tiempo de laborar realizado en horas efectivas de trabajo ordinario y extraordinario,

servicios en jornadas diurna o nocturna que exceda de cuarenta (40) horas semanales será remunerado con un recargo de cuarenta por ciento".

No obstante, esta materia está regulada por el Código de Trabajo, en el artículo 33 de la siguiente manera:

"Artículo 33: Jornada de trabajo es todo el tiempo que el trabajador no puede utilizar libremente por estar a disponibilidad del empleador.

El tiempo de trabajo que exceda de los límites señalados en el artículo anterior, o de límites contractuales o reglamentarios inferiores, constituye la jornada extraordinaria y será remunerado así:

1. Con un veinticinco por ciento de recargo sobre el salario cuando se efectúe en el período diurno;

2. Con un cincuenta por ciento de recargo sobre el salario cuando se efectúe en el período nocturno o cuando fuere prolongación de la jornada máxima iniciada en el período diurno; y

3. Con un setenta y cinco por ciento de recargo sobre el salario cuando la jornada extraordinaria sea prolongación de la nocturna o de la jornada mixta iniciada en el período nocturno".

El demandante considera que la forma diferente de regular las horas extraordinarias de trabajo en estas normas atenta contra el artículo 63 constitucional que establece el principio de la igualdad salarial.

"Artículo 63. A trabajo igual en idénticas condiciones, corresponde siempre igual salario o sueldo, cualesquiera sean las personas que lo realicen, sin distinción de sexo, nacionalidad, edad, raza, clase social, ideas políticas o religiosas".

Principio que está ampliamente desarrollado en el artículo 10 del Código de Trabajo, que a la letra dice:

"Artículo 10. Se garantiza el principio de igualdad de salario. A trabajo igual al servicio del mismo empleador, desempeñado en puesto, jornada, condiciones de eficiencia y tiempo de servicios iguales, corresponde igual salario, comprendido en éste los pagos ordinarios y extraordinarios, las percepciones, gratificaciones, bonificaciones, servicios y cualesquiera sumas o bienes que se dieran a un trabajador por razón de la relación de trabajo". (Subrayado de la Corte).

Este artículo es específico y determina las condiciones necesarias para que opere la igualdad salarial, principio que, en términos generales, busca proteger el salario de los trabajadores de cualquier tipo de discriminación. En este sentido se ha expresado

el Dr. Arturo Hoyos, en su obra Derecho Panameño del Trabajo, cuando señala que "Mediante este principio se busca evitar la discriminación salarial, es decir, distinciones injustificadas en cuanto a retribución se refiere entre trabajadores que se encuentran prestando igual trabajo en iguales condiciones" (subrayado de la Corte). La premisa fundamental para el pago de igual salario es que se realice igual trabajo en iguales condiciones y con el mismo patrono.

Sobre este tema también ha escrito el licenciado Jorge Fábrega considerando que "La Constitución consagra el principio de igualdad ante la Ley y la prohibición de fueros y privilegios, mediante preceptos dirigidos al Legislador. En general, nuestra jurisprudencia ha considerando que se trata de derechos frente al Estado (y que no son aplicables a las relaciones entre particulares). Con todo, la legislación laboral consagra una serie de normas especiales para trabajadores del campo, mar, construcción, enseñanza, etc. La jurisprudencia en general ha sostenido que no violan el principio de igualdad ante la Ley ni constituyen fueros o privilegios prohibidos en la carta. Recientemente se expidió la Ley 1 de 1986 que instituye un régimen especial para las pequeñas empresas...La Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre estos regímenes especiales y así ha declarado constitucional normas sobre trabajo en el mar, a pesar de su divergencia marcada con el trabajo en la tierra" (El trabajo en la Constitución. Estudios de Derecho Constitucional Panameño, Panamá 1987. página 524).

En otro párrafo agrega el licenciado Fábrega "Obviamente, la igualdad no significa igualitarismo ya que la remuneración debe ser proporcional, entre otras cosas, al trabajo efectivamente prestado. Por lo demás, la discriminación lesiva del principio de igualdad podía darse tanto por la regulación diferente de supuestos iguales como por la igual normación de supuestos distintos".

Efectivamente, la Ley 34 de 1979 no es la única que establece recargos inferiores para el pago de las horas extras de trabajo, el artículo 261 del Código de Trabajo señala que el sobretiempo de los trabajadores marinos se pagará con un recargo del 25%; igualmente, para los trabajadores del campo según el artículo 2 de la Ley 1 de 1986 las horas extraordinarias causarán un recargo único del 25%.

El principio de igualdad salarial, establecido en el artículo 63 de la Constitución Nacional, exige igual trabajo en idénticas condiciones, la norma que está en discusión forma parte de una Ley Especial, complementaria del Código de Trabajo, Ley 34 de 1979, dictada para regular exclusivamente las relaciones de trabajo en los Puertos de Balboa y Cristóbal, toda vez que el trabajo portuario se realiza en condiciones distintas por lo que no se excluye del ámbito de aplicación del Código de Trabajo; la Corte, en reiteradas ocasiones ha manifestado que estas normas especiales no vulneran el principio constitucional del artículo 63.

Por otro lado la Constitución Nacional contempla una norma específica que tiene relación directa con el tema en discusión, el artículo 66, que se refiere a las jornadas de trabajo y las jornadas extraordinarias y establece que éstas serán pagadas con un recargo, sin determinar máximo o mínimo, lo que se deja a criterio del legislador, la norma impugnada tampoco riñe con este artículo.

En consecuencia, esta Superioridad considera que no existe violación del artículo 63 de la Carta Magna invocado por el demandante, ni de otra disposición constitucional por parte del artículo 27 de la Ley 34 de 1979.

Por tanto LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, Declara que NO ES INCONSTITUCIONAL el artículo 27 de la Ley 34 de 26 de septiembre de 1979 y Ordena devolver el presente expediente al Tribunal de origen.

NOTIFIQUESE,

(FDO.) CARLOS LUCAS LOPEZ T.

(FDO.) ELOY ALFARO

(FDO.) RAUL TRUJILLO MIRANDA

(FDO.) JOSE MANUEL FAUNDES

(FDO.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(FDO.) EDGARDO MOLINO MOLA

(FDO.) FABIAN A. ECHEVERS

(FDO.) MIRTZA ANGELICA

FRANCESCHI DE AGUILERA

(FDO.) ARTURO HOYOS

(FDO.) CARLOS H. CUESTAS G.

SECRETARIO GENERAL

CONSULTA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA SALA TERCERA (CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO) DE LA CORTE SUPREMA. MAGISTRADO PONENTE: FABIAN A. ECHEVERS.

-CONSULTA INADMISIBLE-

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO. PANAMA, DIECIOCHO (18) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

VISTOS:

Dentro del trámite de demanda contencioso administrativo de plena jurisdicción que promoviera con el objeto de que se declare nulo, por ilegal, el Decreto de Personal No.134 de 6 de julio de 1992, emitido por el Ministerio de Obras Públicas y para que se hagan otras declaraciones, el licenciado Carlos Ayala Montero presentó advertencia de inconstitucionalidad de los artículos 58 y 103 de la Ley 135 de 1943, reformado por la Ley 33 de 1946, así como del numeral 2 del artículo 348 del Código Judicial.

Ello dio lugar a que el Magistrado Sustanciador del negocio, actuando en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema, elevara la consulta correspondiente al Pleno de esta Corporación de Justicia, con base en lo que dispone el inciso 2o., numeral 1, del artículo 203 de la Constitución Nacional, mandato que repite el artículo 2548 del Código Judicial.

En estos momentos la consulta se encuentra en estado de resolver sobre su admisibilidad, a lo que se procede.